

Venezuela: entre la esperanza popular y la crisis económica	Título
Patruyo, Thanalí - Autor/a; Gómez Calcaño, Luis - Autor/a;	Autor(es)
Caracas	Lugar
CENDES - Centro de Estudios del Desarrollo	Editorial/Editor
1999	Fecha
Colección Cendes VE Venezuela	Colección
Democracia; Partidos políticos; Política económica; Crisis;	Temas
Doc. de trabajo / Informes	Tipo de documento
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Venezuela/cendes-ucv/20120814040511/calca.pdf	URL
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es	Licencia

Seguí buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO
<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)
Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)
www.clacso.edu.ar



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Latin American Council of Social Sciences



Venezuela: entre la esperanza popular y la crisis económica

Luis Gómez Calcaño

Thanalí Patruyo¹

Junio 1999

Introducción: crisis del rentismo y del modelo hegemónico (1989-1998).

El gobierno del presidente Hugo Chávez, iniciado el 2 de febrero de 1999, ha sido reconocido dentro y fuera de Venezuela como una ruptura política con el pasado. Sin embargo, no es fácil saber el grado de profundidad de esta ruptura, ni la dirección hacia la cual va a orientarse. En efecto, no sólo se trata de un cambio en el Poder Ejecutivo, sino una redefinición del mapa político, que incluye el surgimiento de nuevos actores, el descalabro de los que dominaron la escena durante cuarenta años y la inminente redefinición de las instituciones políticas por obra de una Asamblea Constituyente.

Los signos de deterioro del sistema “populista de conciliación” (Rey, 1972) se multiplicaron en las últimas dos décadas, acentuándose con sacudidas importantes como los motines de febrero de 1989 y los intentos de golpe de Estado de 1992 (Gómez Calcaño, 1992). Aunque las actuales transformaciones políticas no son una consecuencia directa de la baja de los precios del petróleo producida desde fines de 1997, los efectos a largo plazo del modelo de desarrollo centrado en la renta petrolera y su agotamiento, son el telón de fondo que explica algunas precondiciones de estos cambios.

Las instituciones sociopolíticas que habían tenido gran éxito durante la fase del rentismo petrolero se fueron deteriorando en varios ámbitos. Las tasas de crecimiento económico han sido inestables y dependientes de los cambios en los precios del petróleo. La inversión privada interna sufre un largo período de estancamiento, y la externa ha oscilado fuertemente como consecuencia de los cambios en las políticas económicas y los frecuentes episodios de inestabilidad ocurridos en la última década.²

1 Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), Universidad Central de Venezuela

El desempleo abierto, la informalidad y la pobreza han venido aumentando, sin que sucesivos programas de ajuste y planes económicos hayan logrado restablecer las bases para un crecimiento sostenido. Al mismo tiempo, las instituciones centralizadas responsables de las políticas sociales, como los ministerios de salud o educación, y el seguro social, se fueron deteriorando, como consecuencia de prácticas clientelistas y corruptas, pero también de su atraso organizacional y su incapacidad para adaptarse a los cambios económicos y sociales de los noventa. Aunque el deterioro fue gradual, para fines de los noventa convergieron las tensiones de las diferentes esferas sociales, adquiriendo la forma de un cuestionamiento creciente al sistema político predominante. La articulación entre los diagnósticos críticos en lo económico, social y político produjo un modelo ideológico de explicación de la crisis y proposiciones de cambio, que caracterizaba a la sociedad venezolana como un conjunto de víctimas pasivas de una clase política corrupta.

Aunque este modelo ideológico no carece de elementos reales, como la existencia de profundas desigualdades y la generalización de la corrupción, reduce problemas estructurales profundos a la “mala voluntad” de los políticos. Así, problemas objetivos como el agotamiento del modelo rentista, o el deterioro incesante de la productividad, se convierten en “puntos ciegos” que pueden afectar la viabilidad de los programas políticos que se ofrezcan para resolver los problemas planteados; además, el modelo hace recaer sobre las instituciones del régimen democrático venezolano la responsabilidad por procesos cuya causalidad es mucho más compleja.

Este enfoque se fue convirtiendo en un “sentido común” compartido por amplios sectores de la población, y sus efectos se perciben en la caída de la adhesión a los partidos políticos, en el esfuerzo de los nuevos liderazgos por ser percibidos como “independientes” y no ligados a las instituciones del sistema, en el refuerzo del rol de actores e instituciones “no-políticas” como las ONGs, la Iglesia y las Fuerzas Armadas, en el éxito de las opciones antipartidistas en las elecciones recientes, y finalmente en los intentos por refundar el sistema político con nuevas instituciones que completen y hagan definitivo el desplazamiento de las viejas élites.

Antecedentes: auge y declive del modelo rentista distribuidor

El modelo rentista distribuidor fue un poderoso motor de integración social y cultural; la movilidad social ascendente que va desde la década de los cuarenta hasta principios de los ochenta, financiada por la distribución desde el Estado en forma directa o indirecta, fue creando una imagen de futuro en la cual todos, incluso los más pobres, percibían subjetivamente oportunidades de ascenso. El hecho de que al mismo tiempo que distribuía renta, buena parte de la elite política se llenara de privilegios y cayera en la corrupción no era percibido como un problema intolerable; el criterio básico para evaluar a los gobernantes era que distribuyeran con amplitud.

Pero sería limitado atribuir toda esa lealtad sólo al clientelismo; los grandes partidos populistas cumplieron una misión histórica desde el punto de vista cultural: la integración de los sectores populares al sistema político. En efecto, el golpe de Estado del 18 de octubre de 1945³ produce en los sectores populares y medios la sensación de ser, al fin, tomados en cuenta, de estar dentro del círculo donde se toman las

2 Para un análisis detallado de la evolución reciente de la economía venezolana, véase Quenan, 1998

3 Llevado a cabo por una alianza entre militares jóvenes y el partido Acción Democrática, abrió paso al período conocido como “el trienio”, que terminó con un segundo golpe de Estado en noviembre de 1948.

decisiones, de ser ciudadanos. Este capital político será, para Acción Democrática, la fuente de una lealtad profunda que llega en algunos casos hasta nuestros días.

Y después de 1958, el resto de los partidos políticos copió el mensaje de AD: los partidos son los intermediarios capaces de representar al pueblo ante los poderes económico y militar, no para sustituirlos ni avasallarlos, sino para arrancarle concesiones que permitan compartir la renta petrolera. Ante estos poderes, los partidos muestran su capacidad para moldear, moderar o por el contrario estimular las demandas de distribución y participación en la renta que surgen desde sus bases.

El límite de esta democracia distributivista estaba en el monopolio de la intermediación ejercida por los partidos: cualquier iniciativa de base que no fuera controlada por ellos era considerada sospechosa de “subversión” y rápidamente corrompida, sabotada o reprimida. Así, la incorporación de las masas al sistema político fue adquiriendo un carácter cada vez más pasivo, donde el acto fundamental de participación era el voto incondicional por los cuadros partidistas, ya fuera en el sindicato, en la asociación de vecinos, en las elecciones municipales o en las nacionales.

Este mecanismo terminó por moldear una ciudadanía pasiva, en la cual sólo tenía sentido organizarse para pedir y no para actuar; donde la selección democrática se limitaba a optar entre líderes –cada vez menos carismáticos y más pragmáticos-- que ofrecían distribuir más renta, llegando a consumir la renta futura a través del endeudamiento y, finalmente, a la imposibilidad de distribuir. El gran viraje de Carlos Andrés Pérez en 1989 y la respuesta popular al mismo fueron un doble y violento despertar de un sueño de treinta años: ni se había justificado la confianza del pueblo en sus intermediarios, ni éstos podían ya confiar en la pasividad de las bases.

Todo el período que va de 1989 a 1992 expresa la agitación y descontento producidos por ese despertar: se multiplican las iniciativas y grupos alternativos, los partidos se estremecen por luchas internas, se proponen iniciativas como la asamblea constituyente, expresiones todas de la búsqueda de nuevos modelos políticos que sustituyan al que ha mostrado su descomposición interna. En este intenso debate, se hacen visibles por primera vez algunos grupos y organizaciones que habían venido trabajando discretamente, por muchos años y contra la corriente predominante, en la tarea de crear organizaciones sociales autónomas, no sometidas a los partidos; la “sociedad civil” hacía su entrada en escena.

Pero el problema de erosión de legitimidad no se limitaba a los partidos políticos: de hecho, el conjunto de pactos políticos iniciados en 1958 había comprometido en una alianza informal a otros factores de poder, como el empresariado, el movimiento sindical, las Fuerzas Armadas y la Iglesia.⁴ La lógica distributivista y clientelar había penetrado también en estos actores, que compartían buena parte de la responsabilidad por el funcionamiento del sistema en un complejo conjunto de mecanismos de concertación, tanto institucionalizada como informal. (Rey, 1972, 1988; Crisp, 1997; Urbaneja, 1992) En consecuencia, la creciente corrupción e ineficiencia del sistema

4 El más conocido de estos pactos es el de “Punto Fijo”, firmado en octubre de 1958. Este pacto comprometía a los tres partidos principales a respetar los resultados electorales de diciembre del mismo año y a gobernar en coalición en el período 1958-1963. A pesar de haber sido éste el pacto menos duradero, por haberse extinguido en ese último año, se convirtió en el símbolo de los acuerdos entre los partidos predominantes. Es por ello que hoy es común referirse --en términos peyorativos-- a todo el período iniciado en 1958 como la “democracia puntofijista”. Para una descripción detallada de los pactos constitutivos de la época, véase López Maya y Gómez Calcaño, 1989.

afectaba a todos los actores, y no sólo a los partidos políticos. Esta corresponsabilidad terminó por crear conflictos en el interior de algunos de estos actores, que tendieron a dividirse entre grupos conservadores y otros modernizadores y críticos de la corrupción. Si los primeros no eran todos necesariamente corruptos, estaban demasiado comprometidos con ciertos privilegios como para atreverse a emprender cambios: empresarios acostumbrados al proteccionismo, gremios y dirigentes sindicales dependientes de favores estatales, jerarcas eclesiásticos generosamente subsidiados, se constituían en aliados de los sectores más conservadores de los partidos. En el otro bando, se levantaban las banderas de la participación, la autonomía de las organizaciones, la lucha contra la corrupción y el resurgimiento de la “sociedad civil”. Esta división entre bandos no podía dejar de reflejarse en el sector militar, y de él surgiría uno de los actores centrales del actual proceso de cambio.

Cambios en el rol político de los militares

Los pactos constitutivos iniciados en 1958 sentaron las bases para resolver uno de los grandes problemas de la evolución política venezolana: el de la participación política de los militares. En efecto, en todo el siglo XX sólo había gobernado, hasta ese año, un presidente civil, y éste había sido derrocado a los siete meses de iniciar su gobierno. Las Fuerzas Armadas, institucionalizadas y centralizadas bajo los gobiernos de principios de siglo, habían sido un factor central de poder en la vida política. Para llevarlos a aceptar su rol formalmente establecido como fuerza obediente y no deliberante, el gobierno de Rómulo Betancourt les otorgó amplia autonomía en el manejo de los asuntos militares y garantizó que la situación material de la oficialidad fuera relativamente holgada. Este ajuste a un rol formalmente limitado fue un proceso lento y difícil, en el cual se produjeron numerosos incidentes y conflictos; pero fue favorecido por la insurrección izquierdista, en cuya fuerte represión coincidieron políticos y militares. La subordinación a los poderes formales del Estado se fue transformando gradualmente en sometimiento a las cúpulas partidistas, quienes podían influir a través del Senado en los ascensos de oficiales superiores, y a través del Ejecutivo en la asignación de recursos y decisión sobre los puestos de comando.

La gran autonomía dada a las Fuerzas Armadas para el manejo de sus recursos económicos permitió que los presupuestos militares estuvieran fuera del escrutinio público, favoreciendo actos de corrupción que luego dieron lugar a grandes escándalos. En algunos casos, personas del círculo íntimo de varios presidentes de la República influyeron abiertamente en procesos de adquisición de material y hasta en los ascensos, lo que produjo creciente descontento entre los militares, especialmente entre aquellos que no mantenían vínculos privilegiados con los partidos. En realidad, las Fuerzas Armadas no habían renunciado en forma absoluta y definitiva a su rol de actores políticos; en cierta forma lo habían canalizado por la vía de un entendimiento ventajoso para políticos y militares. Pero al cambiar las condiciones contextuales, y sobre todo al debilitarse tanto la eficiencia como la legitimidad de los primeros, los segundos se vieron en condiciones de redefinir su papel en la sociedad, y especialmente en los cambios que comenzaron a ser percibidos como inevitables.

El proyecto del MBR-200: primeros esbozos

Es en este contexto que surge el grupo denominado “Movimiento Bolivariano Revolucionario 200”, animado por jóvenes oficiales, en 1983, año bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar. Su líder, Hugo Chávez, se había destacado en su carrera por sus posiciones de nacionalismo extremo y cierto liderazgo natural. El pequeño grupo que inicialmente se planteaba un regreso a principios morales y nacionalistas de

contenido popular, fue madurando la idea de un golpe de Estado en la medida en que se intensificaba la visibilidad de la corrupción dentro y fuera de las Fuerzas Armadas y aumentaba el desprestigio de la clase política. La represión que sucedió a los motines del 27 y 28 de febrero de 1989, en la cual el ejército fue un protagonista principal, causó gran impresión en el Movimiento, ya que consideraron que las Fuerzas Armadas habían sido utilizadas por las élites corruptas para masacrar al pueblo. El círculo de conspiradores se fue ampliando hasta la intentona del 4 de febrero de 1992 y su fracaso militar, que sin embargo se convirtió en el primer triunfo político de Chávez y su primer paso hacia la presidencia.

Es de notar que la ideología “bolivariana” en la época del golpe frustrado, se apoyaba mucho más en aspectos simbólicos y míticos que en proposiciones concretas frente a los problemas del país. La lucha contra la corrupción, la implantación de un poder moral y un mayor protagonismo popular se insertan en un marco nacionalista muy general.⁵ En los años posteriores, los líderes del MBR, y particularmente Chávez, tendrían oportunidad para ir refinando y complejizando su proyecto político.

Efectos políticos del intento de golpe

A pesar de su derrota militar, el intento de Chávez despertó una oleada de simpatía en amplios sectores de la población. Al asumir la responsabilidad por el golpe, y prometer que sólo “por ahora” había sido derrotado, pareció ocupar un espacio que el liderazgo político tradicional había dejado vacío: el del dirigente que se comunica directamente con el pueblo, asume sus errores y no evade responsabilidades. Al mismo tiempo, se presentaba como un actor radicalmente diferente de todos los que habían ocupado el centro de la escena política en los años anteriores. Y finalmente, al ofrecer una solución radical e instantánea a los problemas que afectaban a la población, se convirtió en el foco de esperanzas mesiánicas centradas en el regreso a un modelo sociopolítico de distribución amplia e inclinado a la exaltación de los sectores populares.

Desde el momento del golpe, los principales actores del sistema atacaron a Chávez por su intento de destruir las instituciones democráticas, tratando de caracterizarlo como un golpista más. Pero al mismo tiempo reconocieron que había producido una profunda ruptura ideológica, por lo cual hicieron esfuerzos por recuperar la legitimidad de las instituciones políticas.

Sin embargo, las elites políticas fueron perdiendo, una tras otra, múltiples oportunidades de responder a los cambios demandados: la reforma del Estado, la descentralización y la reforma constitucional, que se habían venido planteando desde años anteriores, se intentaron reactivar desde 1992, pero con gran ambigüedad y vacilaciones (López y Gómez, 1996);⁶ la corrupción en los más altos niveles siguió impune, y el desprecio por los derechos humanos siguió siendo un hecho cotidiano. La identidad entre pueblo y partidos, que había sobrevivido a los desafíos más intensos en

5 Para una descripción detallada de las ideas originarias del Movimiento, véase Zago, 1992. Y para análisis interpretativos de las mismas, véase Gómez Calcaño, 1993, López Maya, 1996, y Arvelo, 1998. Pero sin duda la fuente más completa sobre el pensamiento de Chávez son las seiscientas páginas de entrevistas concedidas entre 1995 y 1998 al historiador Agustín Blanco Muñoz (1998).

6 Quizás la reforma política más exitosa en los últimos años ha sido la descentralización, ya que ha contribuido a legitimar algunos liderazgos regionales y ha estimulado una ampliación de la participación. Sin embargo, este proceso encontró numerosos obstáculos en el Estado y algunos partidos políticos, especialmente durante el gobierno de Caldera (1994-1999).

la década de los sesenta, se fue erosionando, sin que los dirigentes partidistas pudieran superar las barreras que sus propias organizaciones habían impuesto a los cambios.⁷

Cambios en el proyecto “bolivariano”: Del MBR al MVR

El proyecto político del Movimiento Revolucionario Bolivariano 200 (MBR) no era conocido por la población en el momento del intento de golpe. Aunque el mismo Chávez ha afirmado que buscaron contacto con grupos de civiles para acompañarlos en el gobierno en caso de triunfar, las características conspirativas de estos contactos hicieron que se mantuvieran alejados de la opinión pública. Y cuando Chávez aparece en televisión aceptando su derrota, no tiene oportunidad de exponer sus objetivos. Será en entrevistas y libros que se irá haciendo conocer la ideología del movimiento. Ella se caracteriza por establecer una división tajante entre dos sectores de la sociedad venezolana: el de los políticos, que en su conjunto son agentes de la corrupción, y el del resto de la sociedad, incluyendo a los militares, que ha sido víctima de la penetración de los primeros. En sus dos años de prisión, el comandante y sus seguidores más inmediatos intentaron repetir la vía conspirativa; se asociaron a una segunda rebelión, esta vez conducida por generales de varias fuerzas, que también fracasó, en noviembre de 1992. Mientras tanto, la victoria de Rafael Caldera en las elecciones presidenciales de 1993, apoyada parcialmente en la justificación velada que había dado Caldera a la intentona de Chávez, creó un clima más favorable a su acción. Una de las primeras acciones del Presidente fue negociar con los prisioneros para suspender el juicio en su contra a cambio de que éstos aceptaran retirarse definitivamente de la carrera militar. Esta acción se concretó en julio de 1994, y aunque fue criticada por quienes pensaban que no era una buena señal dejar sin castigo un desafío armado al orden constitucional, fue en general acogida con aprobación o indiferencia.

Inicialmente, el movimiento se dedicó a fortalecer su organización “cívico-militar”; en efecto, los insurrectos consideraban que, a pesar de las purgas posteriores a los dos golpes fallidos, quedaban todavía en los cuarteles numerosos partidarios y hasta cuadros ocultos. Por eso no perdían el interés y la expectativa por seguir siendo un factor de poder en el interior de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, comenzó una tarea de organización que se mantuvo en los márgenes de la legalidad: el MBR-200 ya no era un grupo conspirativo, pero tampoco adoptó la forma de partido ni de asociación civil, sino de una organización de hecho, altamente centralizada y con pretensiones de abarcar todo el territorio. En este período, la popularidad de Chávez y su grupo en el público en general pareció decaer.⁸

7 Para una discusión de la erosión de legitimidad de los partidos, basada en resultados de elecciones y encuestas, véase Salamanca, 1998.

8 Un análisis de 1996 interpretaba esa caída como producto de varios rasgos del movimiento: su diagnóstico del proceso histórico venezolano, en el cual se veía al pueblo como permanentemente excluido, ignoraba la participación de los sectores populares en partidos integradores, así como la actual complejidad de las identidades sociales y políticas. La escasa formación política de sus dirigentes les impedía distinguir entre adversarios y posibles aliados, enfrentando a todos los actores institucionales por igual. Su ambigüedad frente a la democracia y la institucionalidad le impedía articularse con las luchas democratizadoras de otros sectores sociales; y finalmente, rechazaba los mecanismos electorales, que consideraba totalmente manipulados por las elites corruptas. (López Maya, 1996, pp. 55-56).

Sin embargo, estas actitudes fueron cambiando gradualmente, hasta convencer al comandante y sus seguidores que quizás valía la pena integrarse en la lucha electoral; el primero en arriesgarse, ante la fuerte desaprobación de Chávez, fue el comandante Arias Cárdenas, quien compitió exitosamente en 1995 por la gobernación del Zulia, el de mayor población del país, y en el que Arias había sido el encargado de la insurrección de febrero de 1992 (López Maya, 1996; Blanco Muñoz, 1998, pp. 309-314). A pesar de conflictos internos y divisiones, el movimiento decidió, en abril de 1997, lanzar la candidatura de Chávez a las elecciones presidenciales de 1998 (Blanco Muñoz, 1998, pp. 404-412). A ese fin, se creó una organización política paralela: el Movimiento Quinta República o MVR. La semejanza de siglas permitía mantener una fuerte identificación con el movimiento original, sin que éste desapareciera ni se sometiera enteramente a las reglas de juego del sistema.⁹ Mientras organizaba al partido, Chávez recorrió varias veces el país, entrando en contacto directo con numerosas poblaciones; su indudable carisma y magnetismo personal probablemente contribuyeron a solidificar amplias simpatías entre personas para quienes inicialmente era un mito lejano. Sin embargo, las elites políticas menospreciaban sus posibilidades de éxito, basándose en su escasa presencia en los sondeos de opinión.

Las campañas electorales de 1998

Los candidatos “modernizadores”

A fines de 1997, los pre-candidatos mejor situados en la campaña presidencial eran una independiente, Irene Sáez, y un dirigente recientemente salido de Acción Democrática, Claudio Fermín. En el curso de 1998, sus candidaturas declinarían a favor de una concentración de los electores alrededor de dos grandes opciones: Chávez y Henrique Salas Römer. Estas dos opciones estaban claramente delimitadas desde el punto de vista ideológico: mientras Chávez enfatizaba en el protagonismo popular, atacaba a las elites y denunciaba al “neoliberalismo salvaje”, la candidatura de Salas expresaba el proyecto de elites modernizadoras, críticas del sistema político vigente, al que calificaban de “populista”, pero temerosas del radicalismo chavista.

Este campo de actores, donde coinciden con matices Sáez, Fermín y Salas, enfatiza en la dicotomía entre partidos políticos y sociedad civil. Aunque evaden la identificación plena con la ideología liberal (ya que la acusación de “neoliberalismo” es todavía hoy un estigma difícil de llevar, sobre todo en el debate político-electoral) sus programas asumen muchos de los elementos de esa ideología, como es otorgar primacía al mercado como núcleo organizador de la sociedad, criticar la intervención del Estado para corregir desigualdades como ineficiente y contradictoria, y basar las expectativas de prosperidad en el desarrollo económico y la incorporación a los mercados mundiales más que en la acción redistributiva del Estado. Sin embargo, dado que este tipo de lenguaje todavía es rechazado por importantes sectores de la población, el discurso de estos actores se fundamenta más en un pragmatismo desideologizado que en una cruzada doctrinaria.

A pesar de su atractivo inicial, las candidaturas de Sáez y Fermín fueron perdiendo credibilidad. La primera no logró convencer de su capacidad política, y selló su declive al aliarse con el partido COPEI, visto como uno de los principales responsables del fracaso del sistema democrático. El segundo no pudo captar a las bases descontentas de Acción Democrática. Ello fue favoreciendo la opción de Salas Römer. Tal como Irene Sáez, había construido su base política gracias a la descentralización. Perteneciente a una familia de empresarios, logró obtener en 1989 la gobernación del estado Carabobo

⁹ Otra razón para crear un nombre distinto es que la Ley del Sufragio prohíbe el uso de “símbolos patrios” por los partidos. Por lo tanto, el adjetivo “bolivariano” debía ser excluido del nombre del nuevo partido.

enfrentando a los poderosos y corruptos aparatos de Acción Democrática. Reelecto en 1992, pero impedido por ley para una nueva elección, fue sucedido por su hijo en las elecciones de 1995. Salas convirtió entonces su partido regional, Proyecto Carabobo, en Proyecto Venezuela, con el fin de alcanzar la Presidencia. El estilo de Salas, tanto en sus seis años de gobierno regional como en su campaña, fue el de enfatizar la eficiencia y la modernidad; su principal arma propagandística era la difusión de su obra de reforma, especialmente en los servicios de salud, educación, seguridad y mantenimiento urbano. El estado Carabobo aparecía, desde este punto de vista, como vanguardia a la vez de la descentralización y de la modernización. Este mensaje pretendía entonces ubicar a Salas como la opción del cambio antipartidista pero no populista, radical pero no rupturista.

Este discurso encontró una fuerte audiencia en los sectores medios y altos de las ciudades más importantes, decepcionados de esos partidos pero renuentes a apoyar la opción de Chávez, que percibían como radical o autoritaria. Salas tuvo la ventaja de no estar apoyado inicialmente por organizaciones tradicionales (como es el caso de Irene Sáez) ni por disidencias de ellas (como Fermín), sino en una organización nueva, nucleada alrededor de la persona del líder (y este es un elemento que tiene en común con Chávez). ¹⁰La candidatura de Salas mostró una fuerza mayor de la que podría esperarse en un país donde la cultura política predominante fue durante muchos años pro-partidista y favorable a la intervención del Estado, donde ningún partido acepta ser de “derecha”¹¹, y donde muchos liberales temen que se les califique de tales. Sin embargo, la figura carismática de Chávez impulsaría a una fuerte bipolarización del espacio político: en este esquema bipolar, a Salas correspondió, tanto por su posición ideológica como social, el rol del “oligarca” neoliberal.

El difícil camino de las alianzas: de la pureza revolucionaria a los acomodados pragmáticos

Partiendo de niveles muy bajos, ya para marzo de 1998 la candidatura de Chávez se acercaba al primer lugar basándose sólo en sus propias fuerzas. La primera alianza importante se logró con el partido Patria Para Todos (PPT). Este partido había surgido de la división de La Causa R, organización radical que había logrado introducir importantes innovaciones en la vida política, como el intento de trabajar estrechamente ligado a las masas y desarrollar políticas radicales sin caer en las posiciones tradicionales de la izquierda. Esta alianza indicó una primera flexibilización del “chavismo”, ya que en otros momentos el PPT era percibido como un cómplice más del sistema. El PPT aceptó los aspectos clave del programa de Chávez, especialmente la convocatoria a una Asamblea Constituyente para refundar las instituciones políticas.

Otro partido que vacilaba entre el apoyo a varios candidatos era el MAS (Movimiento al Socialismo). En los últimos años, ese partido había participado en el gobierno de Caldera, por lo cual era rechazado por Chávez y sus seguidores. Por su parte, diferentes fracciones del partido se inclinaban por diversos candidatos. Pero el avance de Chávez, quien alcanzó definitivamente el primer lugar en las encuestas en el mes de abril (El Universal Digital, 2-5-1998), comenzó a hacer esta opción más atractiva. Por su parte, aceptar una alianza con el MAS no resultaba fácil al MVR; sabían que

10 En realidad, la figura del independiente que se dirige al público descontento con el partidismo, pero no radical, no es nueva en Venezuela: su primera expresión fue la de Arturo Uslar Pietri en 1963, repitiéndose en la truncada campaña de Renny Ottolina en 1978, y logrando éxito con Caldera en 1993, a partir de su ruptura con el partido que fundó.

11 Con la notable -y fugaz- excepción de Nueva Generación Democrática, que en los años ochenta se calificaba como la “nueva derecha democrática”.

corrían el riesgo de debilitar su imagen de actores radicalmente diferentes de los tradicionales. Sin embargo, la posición de fuerza otorgada por la preeminencia de Chávez en las encuestas permitía presentar la alianza como más ventajosa para el MAS que para el chavismo. Dada la heterogeneidad interna del MAS, la decisión de apoyar a Chávez fue conflictiva y produjo un conjunto de deserciones, tanto de líderes históricos como Teodoro Petkoff, quien renunció al partido, como de algunos sectores juveniles y regionales, que se sumaron a otras candidaturas. Con la incorporación de otros partidos pequeños (como el Partido Comunista) quedó completado un bloque político-electoral que fue designado como “Polo Patriótico”.

El apoyo que había proporcionado el MAS (y otros pequeños partidos de izquierda) a la segunda presidencia de Caldera, tanto en su condición de candidatura como en la de gobierno, había sido una manifestación del *síndrome de delegación* que ha mostrado por muchos años buena parte de la izquierda en Venezuela: ante la imposibilidad práctica de desarrollar su propio liderazgo, se delega en un miembro “progresista” de las élites políticas predominantes (quien por circunstancias coyunturales se encuentra parcialmente enfrentado a ellas) la tarea de abrir el sistema a los actores emergentes, pero siempre “por la puerta trasera”, como una concesión que se otorga a quienes no han sido capaces de construir por sí mismos una base autónoma de poder.¹²

La candidatura del llamado “Polo Patriótico” reproduce parcialmente el síndrome de delegación mencionado. En efecto, Chávez formuló su proyecto político inicial dentro de la institución militar, y los recursos de poder de ese proyecto incluían elementos primordialmente militares (golpe de Estado), complementados con una relación directa entre dirigentes y pueblo, acompañados de contactos con civiles “no contaminados”. Es notoria, en este proyecto, la ausencia de una estrategia de organización política democrática para dar un sustento social a la toma del poder.¹³ Los sucesivos fracasos de los dos intentos golpistas y de la estrategia abstencionista parecen haber obligado al MBR-200 a un duro aprendizaje: el que no bastan los recursos militares ni el carisma individual del líder para acceder al poder y mantenerse en él, sino que es necesario apoyarse en organizaciones sólidamente establecidas. El otro componente de la alianza, los partidos que hoy conforman el llamado Polo Patriótico, llega a la coyuntura actual con el peso del fracaso simultáneo de sus dos estrategias alternativas: la delegación (el gobierno de Caldera) y el intento de llegar al poder con su propio liderazgo (candidatura presidencial de Andrés Velásquez). La alianza entre Chávez y los partidos que lo apoyan es, entonces, necesariamente ambigua e inestable: el primero no es realmente un líder que se haya formado en el combate por los derechos democráticos; durante la campaña electoral y en los primeros meses de gobierno, tuvo que aprender a mediar entre sus partidarios, a negociar, a moderar su lenguaje e incluso a negociar con los representantes de potencias extranjeras y grupos económicos. En ocasiones diluye su lenguaje inicial “depurador” y radical para ampliar

12 El apoyo al gobierno de Isaías Medina (1941-45), y a las candidaturas de Wolfgang Larrazábal (1958) y Luis B. Prieto (1968), son algunos antecedentes de esta opción de subordinación voluntaria, y si se quiere realista, a la hegemonía de los actores tradicionales. *A contrario*, las candidaturas, en diferentes momentos históricos, de José Vicente Rangel (1973 y 1978), Teodoro Petkoff (1978 y 1983) y Andrés Velásquez (1993) fueron intentos de definir un proyecto y un perfil propios, aún sabiendo que las probabilidades de triunfo eran (excepto en el último caso) lejanas.

13 En este sentido, las versiones (incluso del mismo Chávez) de contactos previos al golpe de febrero de 1992 con algunos partidos o fracciones de ellos, muestran alguna semejanza entre la estrategia del MBR-200 y la del movimiento militar que dio lugar al 18 de octubre de 1945: acudir a un partido opositor para ayudar a legitimar una toma del poder que, *de todos modos*, se piensa llevar a cabo, independientemente de la anuencia de ese o del resto de los actores sociopolíticos.

su audiencia en una sociedad compleja, que hace inviable la división tajante entre puros e impuros. El punto culminante de esta “flexibilización” durante la campaña electoral fue quizás la aceptación del apoyo del MAS, partido al que antes se despreciaba como un componente más de la corrupción del sistema.

La izquierda, por su parte, parece actuar con base en un principio que ya había aplicado antes: si este actor goza del apoyo popular, y se ha enfrentado a los sectores más organizados de las élites política y militar, es necesario acompañar al pueblo en su preferencia, tratando de contener y limitar los componentes autoritarios de la personalidad y del proyecto original del líder, para, usándolo como palanca, desplazar a las élites actuales y producir los cambios democratizadores que demanda la sociedad. En este sentido, se produce el clásico síndrome de delegación, pues es sólo a partir de la victoria de este líder que la izquierda se siente capaz de lograr sus metas. El riesgo calculado que se corre es que el efecto palanca se invierta, y el líder retorne, después de la eventual victoria, a su proyecto original con su núcleo de actores de apoyo primigenios: la logia militar y el método expedito de las armas.

Sin embargo, no todo es delegación en esta estrategia: los partidos de izquierda podrían alegar que su fuerza en la alianza reside precisamente en proporcionar al líder y a su movimiento una tradición de pensamiento y de organización muy superiores a lo que fue la confusa, contradictoria y hasta ingenua ideología original del MBR-200. La estrategia consiste en esperar que los partidos de izquierda se conviertan en la vanguardia ideológica capaz de transformar las esperanzas cifradas en el líder carismático, en políticas de ampliación de la democracia y renovación a fondo del sistema político, que superen definitivamente al populismo. Pero esto no es posible sin una verdadera base organizada, sin la lealtad de esta base a los principios y no a los caudillos individuales, y sin una superación de la tendencia cómoda a la delegación. Sólo en la medida en que dichos partidos mantengan la prioridad de los principios de participación democrática sobre el incondicionalismo caudillista, lograrán que el proyecto político que apoyan hoy responda realmente a sus aspiraciones. Es por ello que tienen una responsabilidad histórica decisiva: si realmente quieren desarrollar la autonomía e independencia de la sociedad civil, y no retroceder al paternalismo mesiánico y autoritario, deberán cuidar también la autonomía de su proyecto político, como algo que responde más a ideas trascendentes que a la persona de un líder.

Concentración del voto y “satanización”: los temas centrales de la campaña electoral

La posición dominante de Chávez en las encuestas fue enfrentada por los actores predominantes del sistema político con varias estrategias: en parte de denegación, pero sobre todo de alarma. Aunque el programa de Chávez no era expresamente revolucionario en el sentido económico-social, sí pretendía serlo en el plano político. Más que un simple cambio de gobierno, Chávez prometía una recomposición radical del sistema político, bajo el supuesto básico de que tal recomposición sólo era posible con un desplazamiento total de los liderazgos tradicionales, y especialmente los de AD y COPEI. En otros factores de poder, como los empresarios, la Iglesia y las Fuerzas Armadas, la situación era más matizada. Si bien la gran mayoría de los empresarios miraba la candidatura de Chávez con desconfianza, ella no careció completamente de apoyo en este sector. Algunos grupos económicos nacionales y regionales, y especialmente algunos de los ligados a la agricultura, proporcionaron apoyo discreto. En la Iglesia y las Fuerzas Armadas se percibía la división interna en bloques pro- o anti-chavistas, con un terreno intermedio que insistía en el respeto a los principios y procedimientos constitucionales, fuera quien fuera el ganador. Finalmente, se produjo tensión en el sistema político cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó oficialmente que no daría una visa de entrada al comandante, basándose en su pasado golpista. Aunque Chávez trató de disminuir la importancia del hecho, sus

opositores trataron de utilizarlo para advertir contra un deterioro de las relaciones con aquel país en caso de victoria del polo patriótico. La retórica de Chávez connotaba una visión subyacente más radical, y en ocasiones más autoritaria, que su discurso explícito. Esta connotación fue captada en forma diferencial por los opositores y los simpatizantes del candidato. Los primeros fueron formulando una hipótesis implícita sobre la dualidad de Chávez, que bajo el discurso “bolivariano”, moralista y opuesto a la corrupción ocultaría una ambición de poder autoritario y un proyecto destructor de la democracia. Los segundos, entre los que predominaban los sectores populares, esperanzados por las promesas y el reconocimiento que hacia ellos dirigía el candidato, veían en el miedo y rechazo de los actores del *statu quo* la confirmación del carácter radicalmente diferente de la oferta de Chávez.¹⁴ Esta progresiva identificación de los sectores populares con la opción chavista fue un incentivo adicional para que los partidos de izquierda justificaran su apoyo a este candidato.

Las elecciones y sus resultados

Las elecciones parlamentarias y regionales del 8 de noviembre

El sistema electoral venezolano ha sido objeto de numerosas reformas en los últimos años. En ellas se han combinado, por una parte, la presión de la opinión pública y grupos organizados a favor de la personalización del voto y la disminución de la influencia de los partidos políticos en los organismos electorales; y por la otra los intentos de dichos partidos por evitar perder el control del proceso electoral, que les otorgaba el sistema vigente (Gómez Calcaño, 1998). Una de las reivindicaciones generalmente aceptadas era la separación temporal de las elecciones nacionales, regionales y locales. Estas últimas estaban separadas desde 1979 y las regionales (que eligen gobernadores y asambleas legislativas de los estados) desde 1989. Dado que en 1998 coincidía el fin de los períodos regionales y el nacional, algunos actores sugirieron posponer las elecciones regionales para fines de 1999, con el fin de evitar la influencia de las presidenciales. Esta demanda de separación fue hábilmente aprovechada por los partidos mayoritarios, que comenzaban a temer una victoria chavista en las presidenciales, con un efecto de arrastre sobre las parlamentarias y regionales. Hicieron entonces aprobar por el Congreso un adelanto de éstas para el 8 de noviembre, con la esperanza de protegerse de dicho efecto de arrastre. La separación era apenas de un mes, puesto que las presidenciales estaban fijadas para el 6 de diciembre. La maniobra era evidente y como tal fue denunciada por los partidos del “Polo Patriótico”; y los resultados de las elecciones muestran que en buena medida logró su objetivo.

Otro aspecto central de las elecciones de noviembre fue que por primera vez en la historia electoral moderna del país, las mesas de votación estaban integradas, no por representantes de partidos, sino por ciudadanos comunes, elegidos al azar de las listas de votación, con la sola limitación de tener un nivel educativo suficiente para cumplir las tareas asignadas. También por primera vez el proceso de votación, escrutinio y transmisión de los datos fue hecho con máquinas. Estos dos cambios, introducidos en la última modificación de la ley del sufragio, respondían a demandas de larga data de organizaciones civiles y de la ciudadanía. Se esperaba que las mismas aumentarían la confianza en la honestidad y veracidad del proceso electoral, que había disminuido considerablemente en todo el período democrático.

14 Una manifestación de ese miedo fue una muy costosa campaña publicitaria que trataba de desprestigiar y ridiculizar tanto a Chávez como a la Constituyente. A juzgar por los resultados electorales, sus efectos fueron contraproducentes. No se conoce el origen de los fondos de esa campaña.

Una tercera característica de esas elecciones fue la diversidad de las alianzas, especialmente en las candidaturas a gobernadores. A diferencia de la división en dos polos opuestos (Chávez y Salas) que ya en ese momento definía a las presidenciales, en los estados se dieron numerosas combinaciones entre partidos que pertenecían a lados opuestos de la división.

El resultado de las elecciones del 8 de noviembre mostró un mapa político de gran diversidad, donde ningún partido ni bloque obtuvo la mayoría en el ámbito nacional. El cuadro N° 1 muestra los resultados de la elección parlamentaria, en comparación con los de las dos anteriores.¹⁵

CUADRO N° 1											
Resultados elecciones parlamentarias 1988-1998											
Agrupación Política	1988			1993				1998			
	% votos	Diputados	Senadores	Diputados		Senadores		Diputados		Senadores	
				% votos	Cargos	% votos	Cargos	% votos	Cargos	% votos	Cargos
AD	43,24%	97	22	23,34%	55	24,08%	16	24,09%	62	24,40%	19
COPEI	31,06%	67	20	22,62%	53	22,81%	14	11,96%	28	12,15%	7
MAS	10,14%	18	3	10,81%	24	10,88%	5	8,88%	22	9,12%	6
CONVERG	-	-	-	13,60%	26	13,44%	6	2,46%	3	2,35%	2
LCR	1,65%	3	-	20,68%	40	20,79%	9	2,98%	6	2,97%	1
PPT	-	-	-	-	-	-	-	3,45%	7	3,36%	1
MVR	-	-	-	-	-	-	-	19,87%	41	19,75%	11
PRVZL	-	-	-	-	-	-	-	10,44%	20	10,16%	4
OTRAS	13,91%	16	1	8,95%	5	8,00%	0	15,87%	18	15,73%	3
TOTAL CARGOS		201	46		203		50		207		54

FUENTE: Molina y Pérez 1994 / CNE-Indra (1998). Dirección de Estadísticas Electorales. Resultados Electorales CD ROM. Cálculos propios

El rasgo más resaltante de estos resultados es la caída de COPEI, que baja su porcentaje a la mitad del obtenido en 1988. Sin embargo, AD mantiene su posición relativa, y el MAS disminuye pero en una proporción modesta. Estos resultados confirman, pero no agravan, excepto en el caso de COPEI, la tendencia de las

15 Agradecemos a la Red Universitaria de Estudios Políticos (RedPol), subvencionada por el CONICIT y el BID, su apoyo para el procesamiento de los datos electorales.

elecciones anteriores, que muestra un alejamiento o de los electores respecto de estos partidos. Otro actor gravemente afectado es el par La Causa R-PPT, ahora divididos, que disminuyen sensiblemente su votación, probablemente a favor de los dos nuevos actores emergentes: el MVR y el Proyecto Venezuela. Sin embargo, no deja de llamar la atención el que, a pesar de todo, la primera minoría parlamentaria sigue siendo Acción Democrática, y que el polo patriótico en su conjunto apenas supera un tercio de los integrantes de ambas cámaras legislativas.

Estos resultados fueron interpretados por cada actor a su conveniencia, pero las consecuencias de ellos se fueron aclarando gradualmente: en primer lugar, ninguna fuerza política tendría la hegemonía en el parlamento. Cualquiera que ganase las elecciones presidenciales tendría que negociar con un congreso heterogéneo y potencialmente hostil. Y por otra parte, el total de votos obtenidos por las fuerzas del Polo Patriótico era muy superior al de los partidarios de Salas Römer, lo que hizo perder fuerza a esta última candidatura.

Los resultados relativamente aceptables de AD indujeron un optimismo temporal: la posición oficial del partido era que los votos de AD eran “duros”, y que la disciplina partidista lograría que los militantes llevaran a la victoria al poco atractivo candidato de AD, Luis Alfaro Ucero. Pero este optimismo se fue diluyendo en las semanas posteriores, cuando las encuestas mostraron que el candidato no remontaba la cuesta, descendiendo a niveles entre el 3 y el 4%.

Las elecciones para gobernadores de Estado dieron también un resultado plural y complejo, como lo muestra el cuadro N°2.

CUADRO N°2 Votos Válidos por organización política en elecciones para gobernadores (1992-1998)			
<i>Años</i>	<i>1992</i>	<i>1995</i>	<i>1998</i>
AD	32,11%	34,51%	28,23%
COPEI	34,10%	21,71%	15,09%
MAS	14,30%	10,48%	10,41%
CONVERG	0,10%	8,64%	2,54%
LCR	8,69%	12,71%	3,73%
PPT			3,05%
MVR			14,25%
PRVZL			6,03%
OTRAS	10,69%	12,39%	16,66%
Votos Válidos	4412208	4499648	5025379

FUENTE: CSE (1992-1995)/CNE-Indra (1998). Dirección de Estadísticas Electorales

La caída de los partidos “tradicionales” fue mucho menos marcada, y los emergentes no lograron como partidos individuales superar a AD ni a COPEI. Pero más importante es la pluralidad de alianzas que se agruparon alrededor de los liderazgos regionales. AD obtuvo ocho gobernadores, casi siempre apoyándose en alianzas con partidos menores. COPEI sólo obtuvo tres, pero contribuyó decisivamente a la victoria de otros. Los partidarios del Polo Patriótico obtuvieron seis, Proyecto Venezuela uno, y el resto se distribuyó en diversas combinaciones, casi todas heterogéneas. Un ejemplo de ellas es la candidatura de Francisco Arias Cárdenas, gobernador del Zulia postulado a la reelección por una alianza donde coincidían COPEI (que aportó el principal caudal de

votos), La Causa R, que lo había apoyado, junto a un partido regional, en su victoria de 1995, y el MVR, ahora reconciliado con quien había censurado anteriormente. Desde el punto de vista formal, Arias Cárdenas es considerado independiente, pero al mismo tiempo son evidentes sus afinidades con Chávez. Estos resultados muestran una conducta electoral diferenciada entre lo nacional y lo regional, sobre la cual volveremos al analizar los resultados de la elección presidencial.

La debacle de AD y COPEI: de las ilusiones a la desesperación

Los resultados de noviembre, tomados literalmente, indicaban que los partidos favorables a Chávez habían logrado un apoyo muy inferior a los que se le oponían claramente (32,2 de MVR, MAS y PPT vs. 48,95 de AD, COPEI, Proyecto Venezuela y Convergencia). En este sentido, la operación de adelantar las elecciones regionales parecía haber obtenido éxito. Sin embargo, esta mayoría potencial era una simple suma de votos regionales, cuyas motivaciones y referencias no eran necesariamente las lealtades partidistas de antaño, sino orientaciones mucho más complejas, como los diferentes grados de aceptación de los candidatos a gobernador, las disputas políticas locales y el mayor o menor éxito logrado en la gestión administrativa. Por lo demás, las oportunidades de los candidatos eran inversas a la votación de sus partidos. El de AD, Alfaro, se mantenía estancado, la candidata de COPEI seguía su curso descendente, mientras Salas era el único que no estaba demasiado lejos de Chávez, pero las elecciones habían demostrado la debilidad de su base organizativa.

La actitud de AD y COPEI fue al principio de ignorar la realidad; pretendieron negar los resultados de las encuestas, atacaron a Salas como representante del neoliberalismo y la oligarquía y trataron de mantener las esperanzas de su militancia. Pero gradualmente se fue imponiendo la conciencia de la altísima probabilidad de una victoria de Chávez. Los primeros en reaccionar fueron los gobernadores electos de Acción Democrática, que se sentían amenazados por la actitud recelosa de Chávez frente a la descentralización. Apoyándose en la legitimidad que les daba su reciente elección, comenzaron a insinuar que AD debía sacrificar a su candidato para apoyar a Salas. Esta idea fue inicialmente resistida por la dirección nacional, fuertemente controlada por Alfaro, pero terminó por imponerse. Esta decisión fue un verdadero viraje histórico para Acción Democrática, no sólo porque cambiaba de candidato a menos de un mes de las elecciones, sino que por primera vez apoyaba a uno externo a la organización. El cambio fue traumático porque Alfaro se negó a renunciar a la candidatura, lo que llevó a la dirección a expulsarlo de la organización. En menos de una semana, pasó de ser el dueño del partido y de la candidatura a un paria, candidato de varios micropartidos. En el caso de COPEI, se dio una situación similar, pero más llena de vacilaciones; gradualmente, sectores internos del partido ejercieron presión para que Irene Sáez renunciara a la candidatura. Finalmente, ella decidió liberar a COPEI del compromiso y continuó como candidata independiente.¹⁶

Una encuesta realizada por la empresa Datanálisis poco antes de las elecciones de noviembre obtuvo los siguientes porcentajes: Chávez 45,8 %, Salas 40,7 % Alfaro 6 %, Sáez 2,4 %. (*El Universal digital*, 7/12/1998). Es de hacer notar que en el curso de la campaña hubo un intenso uso de las encuestas de opinión con fines partidistas, lo cual contribuyó al desprestigio general de las mismas. Sin embargo, al menos dos encuestadoras, Datanálisis y Consultores 21, lograron predecir el resultado final de las presidenciales con bastante precisión (Subero, 1999)

16 Estas dificultades de los partidos para despedir a sus candidatos se debían a que la Ley electoral venezolana establecía que un candidato, una vez inscrito, sólo puede ser sustituido si muere, queda incapacitado o renuncia. Sin embargo, AD logró convencer al Consejo Nacional Electoral que eran tan dueños de la candidatura como de los

AD y COPEI procedieron entonces a apoyar a Salas en nombre de la defensa de la democracia, que consideraban gravemente amenazada. Salas trató de disimular ese apoyo peligroso, mostrándolo como el de los gobernadores y alcaldes electos, y no como el de las cúpulas de los partidos. Pero esta maniobra carecía de toda credibilidad. Para buena parte de la opinión pública, Salas se convirtió en “más de lo mismo”, candidato de la partidocracia corrupta; las encuestas reflejaron un rápido aumento del rechazo a su figura, mientras que la intención de voto por Chávez se elevó bruscamente en las últimas semanas de la campaña (*El Universal digital*, 4/12/1998).

Los días previos a las elecciones del 6 de diciembre fueron de gran tensión política, dado que circulaban rumores acerca de fraudes electorales, intervención de las Fuerzas Armadas para impedir una victoria de Chávez, o por el contrario para defenderla, y de insurrecciones populares en caso de desconocimiento de su triunfo.

De hecho, los principales actores políticos ya se habían resignado a una inevitable victoria del comandante, reflejada en todas las encuestas, y se prepararon para enfrentar las consecuencias. Los resultados de estas elecciones contrastan firmemente con los del 6 de noviembre. En primer lugar, la concentración del voto entre los dos primeros candidatos alcanzó el nivel más alto de los últimos cuarenta años: 96,17 %, obteniendo Chávez el 56, 2 % y Salas el 39, 97 %, lo que refleja la diferenciación clara entre estas dos opciones y la percepción de que eran las únicas viables.¹⁷ Asimismo, aunque la abstención se mantuvo en niveles altos, experimentó un leve descenso frente a las presidenciales de 1993 (36,55% vs. 39,84 %). Otro rasgo distintivo es que la votación fue mucho más homogénea que en noviembre: Chávez venció en 18 de las 24 entidades federales, en proporciones que iban del 50 al 69 por ciento, siendo su menor votación de 38 % en el estado Apure.¹⁸ El fenómeno se amplifica al examinar los resultados obtenidos por los partidos (véase cuadro N° 3)

CUADRO N° 3 Votos Válidos por organización política en elecciones presidenciales (1988-1998)			
<i>Años</i>	<i>1988</i>	<i>1993</i>	<i>1998</i>
AD	52,76%	23,23%	9,05%
COPEI	40,08%	22,11%	2,15%
MAS	2,71%	10,59%	9,00%
LCR	0,37%	21,95%	0,11%
CONVERG		17,03%	-
PPT			2,19%
MVR			40,17%
PRVZL			28,75%
OTRAS	4,08%	5,09%	8,59%
Votos válidos	7315186	5616699	6537304

FUENTE: CSE (1958-1995)/CNE-Indra (1998). Dirección de Estadísticas Electorales

símbolos y propiedades del partido, por lo que fueron autorizados a sustituir a Alfaro.

17 Irene Sáez obtuvo 2,82 % y Alfaro 0,42%.

18 Los datos cuantitativos provienen de: Consejo Nacional Electoral/INDRA, Dirección de Estadísticas Electorales.

Los partidos de los dos líderes principales encabezan las preferencias; le siguen de lejos los aliados de Chávez, el MAS y el PPT, prácticamente a la par de AD y COPEI, que obtienen las menores proporciones de votación en los últimos cuarenta años. La diferencia entre los votos obtenidos por estas organizaciones en las regionales y presidenciales evidencia el profundo trauma que causó en su militancia el conjunto de maniobras desesperadas de las semanas anteriores. En el caso de AD, tan autoritaria y centralizada había sido la forma en que el caudillo Alfaro había impuesto su candidatura, como aquella en que fue despojado de su cargo y su militancia. Muchos miembros de Acción Democrática, después de haber creído la propaganda negativa de su propio partido contra Salas, encontraban difícil otorgarle su voto. La humillación fue aun mayor para COPEI, que sólo consiguió aportar a Salas 2,15 % de los votos, menos que los obtenidos por su ex candidata.

Razones de una victoria

En síntesis, Chávez obtuvo una victoria clara y contundente, con lo cual se disiparon los temores de enfrentamientos y conflictos de poder; la reacción popular fue jubilosa pero ordenada, y en sus primeras declaraciones el Presidente electo mostró una faz conciliadora. En sus propias palabras, de frecuentes resonancias bíblicas, “todo se ha consumado”. La victoria electoral aparecía así como un hecho ineluctable dentro del orden de las cosas. Tocaba ahora comenzar la construcción de la Quinta República.

¿Por qué el pueblo venezolano, que durante más de dos décadas soportó pasivamente el deterioro del modelo rentista distribuidor, y ratificó a sus gestores en sucesivas elecciones, finalmente optó por el cambio radical? Una explicación obvia es el deterioro incesante de los niveles de vida, que puede haber alcanzado un límite subjetivo difícil de establecer *a priori*. Pero los niveles de interés por la política y el fervor popular que ha inspirado el comandante permiten pensar que no se trata de un simple apoyo utilitario, sino de algo más: la conformación de un mito político, en el cual se sintetizan la reacción frente a la exclusión material de la que han sido objeto los sectores populares, pero también, y quizás sobre todo, de su exclusión simbólica. Como Perón en la década de los cuarenta, un ex militar de gran carisma es percibido como el *outsider* dispuesto a redirigir la distribución de la renta, pero sobre todo a reintroducir simbólicamente al pueblo en los espacios del poder, del cual las elites lo habían venido excluyendo con cada vez mayor indiferencia. En un contexto en que la palabra “democracia” ha sido asociada a variables negativas como corrupción, pobreza e injusticia, ni los antecedentes golpistas ni las conexiones militares del candidato fueron obstáculo para arriesgarse a un cambio radical.

La V República: sueño y realidades

Hacia un nuevo sistema de hegemonía: el Polo Patriótico como bloque popular, la Asamblea Constituyente como refundación y regeneración del Estado, de la política y de la sociedad.

Uno de los primeros dilemas del nuevo gobierno sería el de poner en práctica las profundas transformaciones que se había planteado. Las ideas programáticas del chavismo se caracterizan por el eclecticismo ideológico y la referencia simbólica a un pasado glorioso más que por las proposiciones concretas. Sin embargo, pueden detectarse algunas ideas-fuerza que aparecen constantemente en su acción y su discurso.

En primer lugar, la obsesión por producir un cambio radical en el escenario político, entendiéndolo como la construcción de nuevas bases tanto en lo que respecta a las instituciones como a los actores. Frente a los partidos, actores particularistas, egoístas y corruptos, se levanta el pueblo como sujeto homogéneo en su pobreza, puro por su condición de excluido, predestinado por su historia y democrático a pesar de ella. Lo guía un movimiento cívico-militar, con lo cual se supera la contradicción entre militarismo y civilismo que ha conformado uno de los dilemas de la historia política venezolana. La transformación de la sociedad venezolana es también la de sus Fuerzas Armadas, que dejarán de ser agentes represivos al servicio de los dominadores para convertirse en fuerzas democráticas aliadas del pueblo.

Para llegar a esta Quinta República, alcanzar la Presidencia es sólo un primer paso; el segundo e inmediato es la formación de la Asamblea Constituyente, órgano que será la verdadera representación del pueblo, ya que en ella no se permitirá la participación de los corruptos. La Asamblea, como poder constituyente originario, estará por encima de todos los poderes constituidos, y en consecuencia podrá disolverlos si le parece conveniente. Uno de los primeros pasos será la disolución del Congreso, por estar constituido en su mayoría por representantes del orden corrupto. Pero la amplitud de atribuciones de la Asamblea puede llevarla a intervenir otros poderes como el judicial y el electoral, también penetrados por la corrupción imperante.¹⁹ La lucha es de la honestidad contra la corrupción, de los patriotas contra los vendedores de la patria. El resultado de la Asamblea será una Constitución que establezca la democracia participativa como principio, amplíe los derechos populares e impida el regreso de la corrupción.

Este discurso, que hemos reconstruido a partir de las principales fuentes del chavismo, como son las propias declaraciones de su líder y documentos programáticos, divide a la sociedad en dos bloques antagónicos, lo que supone un enfrentamiento político agudo, dada la previsible resistencia de los privilegiados. Sin embargo, el lenguaje ha cambiado desde la época del golpe, en que se planteaba la solución de fuerza como paso desencadenante de las transformaciones, hasta el momento actual, en que se insiste en la necesidad de que el cambio sea revolucionario y profundo pero a la vez pacífico.

El sistema de conciliación puesto a prueba: ¿Concertación o conflicto antagónico? La polémica alrededor del decreto N° 3 y la convocatoria a referendo

La toma de posesión del Presidente Chávez fue tan heterodoxa y teatral como él mismo. En lugar de jurar el respeto a la Constitución y las leyes, confeccionó un confuso juramento de transformar la sociedad y sustituir la “moribunda” Constitución actual por una nueva. Su discurso inaugural fue también atípico por su carácter improvisado y por su duración, pero lo más importante fue su anuncio que ese mismo día iba a emitir un decreto llamando al pueblo a pronunciarse sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Con este anuncio tomó la iniciativa frente al Congreso, que discutía en ese momento las posibles bases de una convocatoria, e incluso formas de concertación con el gobierno para establecer bases comunes.

19 Es obvio que, desde el momento que un poder puede “disolver” o reorganizar a los otros, cesa la división y autonomía entre los poderes, lo que no puede calificarse de otro modo que como dictadura. Esta implicación inescapable de una constituyente plenipotenciaria no ha parecido inquietar a los partidarios del comandante, sea porque consideran que su origen en el voto popular legitima incluso a una dictadura, sea porque confían en que serán otros, y no ellos, los afectados por este poder dictatorial.

La cuestión de la Asamblea Constituyente se ha convertido en el núcleo de los conflictos políticos y jurídicos más importantes del joven gobierno de Chávez. Ya desde antes de tomar posesión, se planteó la polémica entre los partidarios de éste, quienes pensaban que bastaba con la aprobación de un simple referéndum consultivo para crear la Constituyente y aquellos, en su mayoría opositores al nuevo Presidente, que consideraban necesario hacer antes una reforma puntual de la Constitución que estableciera la figura jurídica de esa Asamblea y sus características de funcionamiento. Una consulta a la Corte Suprema de Justicia decidió la cuestión. Según la Corte, el pueblo, como poder constituyente, podía responder una consulta sobre el tema y por medio de ella crear la figura de la Asamblea. Dado que la iniciativa del referéndum podía ser tomada por el Ejecutivo, el Congreso o un 10 % de los electores, comenzó una carrera entre poderes para tomar la iniciativa y en consecuencia imponer su sello a la Asamblea. Aunque Chávez había anunciado un plazo de dos semanas para su convocatoria, decidió adelantarla para evitar que el Congreso pudiera influir sobre las características y atribuciones de la Constituyente. El decreto de convocatoria incluía dos preguntas para el referéndum:

- “1.- ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa?.
- 2.- ¿Autoriza usted al Presidente de la República para que mediante un Acto de Gobierno fije, oída la opinión de los sectores políticos, sociales y económicos, las bases del proceso comicial en el cual se elegirán los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente? ” (Decreto Nº 3, 2-2-1999)

Desde su misma emisión, el decreto se convirtió en polémico, puesto que muchos sectores consideraron que el Presidente se había excedido en su poder. Se consideraba que la primera pregunta era exageradamente amplia e imprecisa, y que la segunda otorgaba un rol demasiado preeminente al jefe del Estado, negando la participación real de otros sectores en la fijación de las bases de la Asamblea. Fueron introducidos numerosos recursos de nulidad del decreto ante la Corte Suprema, mientras se desataba un intenso debate sobre el tema. En un discurso público, el Presidente pidió a la Corte una decisión acorde con los intereses del pueblo y dio a entender que ante una sentencia desfavorable podrían darse movilizaciones populares. Este discurso fue interpretado por muchos como un intento de intimidar a la Corte y el inicio de un conflicto de poderes. Pero después de este enfrentamiento inicial, el Presidente tomó medidas conciliatorias, y abrió una consulta nacional con el Congreso y diversos grupos sociales, para oír sus opiniones acerca de las bases de la Constituyente. El resultado de la consulta fue recogido en marzo en un conjunto de bases que fijaban el número de constituyentes, los mecanismos de postulación y elección, y otras características del cuerpo a elegir.

Pocos días después la Corte Suprema decidió anular la segunda pregunta, por considerar que violaba el derecho a la participación y correspondía más a una demanda de delegación que a una consulta. Sin embargo, la misma Corte aceptaba que la o las nuevas preguntas debían apoyarse en las bases propuestas por el Ejecutivo. Pero más allá de esta polémica sobre la convocatoria y otros aspectos prácticos, la Corte dio a entender que la Asamblea Constituyente debía mantenerse, en su acción, dentro de los límites del Estado de Derecho y respetar la autonomía e independencia de los poderes. Esto significaba que la Asamblea perdía su carácter “originario”, y por lo tanto plenipotenciario; no podía disolver al Congreso ni reorganizar a otros poderes públicos hasta terminar su labor y someterla a un referéndum aprobatorio. El respeto a esta interpretación de la Corte limitaría en gran

medida el proceso de transformación “revolucionaria” al que aspiran el Presidente y sus partidarios, pero no cierra completamente la vía de los cambios. También significa que el gobierno tendría que resignarse a coexistir, durante al menos un año, con un Congreso en el que sus partidarios son minoría, y por lo tanto debería proceder por medio de la negociación y la búsqueda de consensos. Aunque el Presidente aceptó el veredicto sobre la anulación de la segunda pregunta, considerando que no afectaba la marcha del referéndum, insistió en todas sus apariciones públicas en mantener el carácter “originario” de la Asamblea, desafiando abiertamente la sentencia de la Corte Suprema, y amenazando a los poderes constituidos con la disolución.

Sin embargo, el gobierno tiene hasta ahora a su favor la opinión pública, en una medida muy superior que la mayoría de los anteriores. Una encuesta realizada a fines de febrero muestra que el arranque del gobierno fue calificado como “bueno” o “muy bueno” por un 67,8 % de los encuestados, y como “regular hacia bueno”, por un 21,5 %; mientras que el total de opiniones negativas en diversos grados llega al 7,5 %.²⁰ La idea de la convocatoria de una Constituyente cuenta con un 88,9 % de aprobación, y la de disolver al Congreso oscila entre un 52 % de aprobación (en los sectores más pobres) y un 34,1 % (en los más ricos). Las expectativas acerca de la Constituyente iban inicialmente más allá de lo que podría esperarse de un cuerpo legislativo especializado. A la pregunta de qué cree va a lograr a través de la Constituyente, las tres primeras respuestas en orden de frecuencia fueron “solucionar los problemas de vivienda y seguridad personal” (14,3 %), “castigar la corrupción” (14,2%), y “crear fuentes de empleo” (12,4 %), viniendo en cuarto lugar la de “cambiar la Constitución nacional “ (11,2 %).²¹ El carácter poco realista de estas expectativas era un peligro potencial para la popularidad del régimen, si éste no lograba cumplirlas por medio de sus políticas económicas y sociales. Sin embargo, ya para el mes de junio las expectativas parecieron hacerse más realistas, ya que el 29,3 % de los encuestados respondió que la Asamblea servía para cambiar la Constitución Nacional, pero todavía el 55, 6 % creía también que la constituyente resolvería los problemas económicos del país (*El Universal*, 23-6-1999, p. 1-2).

El referendo nacional del 25 de abril de 1999

El proceso de debate y conciliación entre actores llevó al Presidente, después de una amplia consulta con partidos y organizaciones de la sociedad civil, a modificar la segunda pregunta del referendo, incluyendo en ella las bases de la consulta, revisadas por el Consejo Nacional Electoral. Además de algunas definiciones sobre la composición de la Asamblea, las bases debieron ser modificadas para conformarse a la decisión de la Corte Suprema, según la cual la Asamblea no era “originaria”. El resultado del voto fue motivo de polémicas, porque, a pesar de haber sido aprobadas ambas preguntas por más del 90 % de los votos válidos, la abstención fue la más alta de los últimos cuarenta años: 62, 6 % según el Consejo Nacional Electoral. Para el gobierno, lo importante era el alto porcentaje de aprobación de quienes habían votado, mientras que la oposición interpretaba la abstención como una protesta o, al menos, como un debilitamiento de la capacidad de movilización del Presidente y sus partidos. En todo caso, el resultado sentó las bases para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, prevista para el 25 de julio.

20 Para el mes de mayo, otra encuesta permitía constatar una cierta erosión de estas cifras, ya que la primera categoría bajó a 54 % y la segunda ascendió a 26 %. La aprobación hacia la Constituyente bajó a 81 % (*El Nacional*, 6-6-1999, p. D/3)

21 Los resultados de esta encuesta fueron publicados por los diarios *El Universal* (p. 1-10) y *El Nacional* (p. D-1) en sus ediciones del 20-3-1999.

La forma de elección de los constituyentes fue motivo de una nueva polémica entre partidarios y rivales del gobierno. En armonía con la creciente demanda por la personalización del voto, las bases aprobadas incluían un sistema de voto individual dividido en un circuito nacional, que elegiría veinte asambleístas, y el resto en circunscripciones regionales. La polémica se presentó en cuanto a si debían o no ser incluidos los símbolos y siglas partidistas en el instrumento de votación. Los partidarios del gobierno preferían esta inclusión, que permitiría a sus bases votar en bloque por los candidatos del “polo patriótico”, identificándolos claramente por el símbolo del bloque, la boina roja. Para la oposición, y también para los candidatos surgidos de organizaciones autónomas de la sociedad civil, la inclusión de los símbolos desnaturalizaba el carácter plenamente nominal de la elección.

Paradójicamente, el grado de desprestigio de los partidos, y especialmente el de los que habían gobernado, ha llegado a un grado tal que hoy en día la mayoría de los venezolanos considera que votar “por nombres” es una práctica electoral más moderna o avanzada que votar por partidos. Esta opinión tan difundida ilustra claramente el fin de un ciclo político: aquel que comenzó en 1936, impulsado por la lucha contra el caudillismo y el personalismo, y centrado en la construcción de organizaciones modernas con mecanismos universalistas de reclutamiento y dirección.

Más allá de la polémica sobre las modalidades del voto, todas las encuestas confirman que los miembros del “Polo Patriótico”, y especialmente su componente principal, se encaminan hacia una amplia victoria, apoyada en la popularidad, aún casi intacta, del Presidente.²² En efecto, a pesar de las graves dificultades económicas, una reciente encuesta mostraba que 58,7% atribuyó a los pasados gobiernos la situación actual y 22,9% a los partidos políticos, mientras que sólo un 3,2% culpó al presidente. El partido principal de gobierno, el MVR, recoge un 31,3% de simpatías, AD ocupa un lejano segundo lugar con 7,6 %, y Proyecto Venezuela el 3,7%; mientras los aliados menores del gobierno, MAS y PPT, apenas superan el 3 % cada uno (*El Universal Digital*, 10-6-1999).²³

La debilidad de las organizaciones distintas al partido personalista de Chávez, tanto del gobierno como de la oposición, se refleja en los debates de opinión pública, en los cuales el Presidente asume personalmente la defensa de su gobierno, hasta el punto de haber creado sendos programas semanales en la radio y la televisión, en los cuales responde preguntas y demandas directas de ciudadanos comunes. El tono de las demandas es el de la resolución inmediata de problemas personales como la falta de una vivienda, de un empleo o de una oportunidad de estudio. En sus apariciones mediáticas, el Presidente combina la atención detallada a las demandas con fuertes ataques a sus adversarios, en un estilo que destaca su identificación personal con los sectores populares. En su permanente confrontación con una oposición debilitada y desprestigiada, el Presidente encuentra una fuente de renovación de su legitimidad, a pesar de las fuertes dificultades económicas por las que atraviesa el país.

Las políticas económicas y sociales: entre el sueño y la realidad.

22 Esta mayoría puede verse reforzada por el carácter estrictamente uninominal de la elección, que elimina totalmente cualquier tipo de representación proporcional, por primera vez en las elecciones modernas venezolanas. La dispersión de los candidatos independientes y de oposición favorecerá desmesuradamente las posibilidades del bloque favorable al gobierno.

23 Otra encuestadora proporciona resultados ligeramente diferentes: MVR 44 %, Proyecto Venezuela 6%, PPT 4%, AD 4% y Copei 3%. (*El Nacional on line*, 24-6-1999).

Un programa económico fuertemente politizado

Antes de entrar a examinar las principales medidas económicas y sociales del nuevo gobierno, es necesario tomar en cuenta dos variables fundamentales que las han condicionado: por una parte, las orientaciones generales que en ese ámbito había expresado el programa de gobierno del candidato, y por la otra, las condiciones objetivas extremadamente difíciles en las que se inicia la acción de gobierno. La imprecisión de las primeras y la inmediatez de las segundas puede explicar un cierto aire de improvisación e indecisión en las políticas iniciadas.

Una primera versión del programa socio-económico del MBR, titulada “Agenda Alternativa Bolivariana”, fue presentada en 1996 como respuesta a la “Agenda Venezuela”, programa de ajuste del Presidente Caldera.

El diagnóstico de la agenda bolivariana enfatizaba en los temas de la pobreza, la distribución regresiva del ingreso y la “desnacionalización”, como tendencia que se expresaba en el excesivo peso de la deuda externa, la apertura a la inversión petrolera por empresas transnacionales y la política de privatización.

Frente a este diagnóstico, se proponía un modelo “humanista y autogestionario” que buscaría minimizar la utilización improductiva del excedente y maximizar los niveles de acumulación en cinco sectores: empresas básicas y estratégicas; bienes de consumo esenciales; servicios esenciales y gobierno; banca y finanzas y la gran industria. Al Estado se asignaba un papel de propietario, promotor o regulador, de acuerdo al sector del que se tratara. Las empresas básicas y estratégicas serían de propiedad estatal, las de bienes de consumo esenciales, así como los servicios esenciales y banca y finanzas serían mixtos, pero regulados y controlados por el Estado. Finalmente, la gran industria sería fundamentalmente privada.

En cuanto a la política petrolera se planteaba la “internalización”, que implicaba la propiedad de la industria petrolera en manos del Estado, la industrialización “hacia abajo” (gasificación y petroquímica) y la tecnificación “desde adentro” (ciencia y tecnologías propias). En términos generales, la “Agenda Bolivariana” planteaba más un modelo de sociedad que la forma de alcanzarlo, por la gran imprecisión otorgada a las políticas concretas.

El programa de gobierno elaborado en 1998 repite muchos de los planteamientos de la “Agenda”, pero es más moderado en su oposición a las tendencias liberales, tratando de integrar una cierta aceptación del mercado. Así, por ejemplo, al definir el marco de la relación Estado-Sociedad, se afirmaba:

“La acción complementaria del mercado y del Estado es indispensable para el funcionamiento eficaz y progresivo de la economía. Es lo que entendemos como la fórmula de las dos manos, donde interactúan la mano invisible del mercado y la mano visible del Estado. El reto del desarrollo debe ser fundamental para el Estado, especialmente en las circunstancias de un país donde éste es poseedor de las principales riquezas, cuya distribución desigual entre la población produce depauperación en amplios sectores de la sociedad” (Programa de gobierno, 1998: III.1)

El Estado deberá cumplir su rol promotor de las actividades económicas:

“Se promocionarán todas aquellas actividades productivas que, por un lado, propendan a satisfacer las necesidades básicas de la población y por el otro, permitan aumentar de manera autónoma y soberana, el grado de cooperación necesario de la economía nacional con la internacional” (1998: III.1)

Pero además, “deberá fortalecer el desempeño de la acumulación del capital social, físico y humano del país” (1998:III.2) lo que implica un rol tutelar en el desarrollo armónico de la infraestructura, vigilancia de la comercialización de los productos alimenticios, para evitar la especulación, y el seguimiento en la gestión de las unidades nacionales, regionales y locales productoras de bienes y prestadoras de servicios, que deben funcionar con autonomía de gestión y eficiencia, pero enmarcadas en los planes y políticas del Estado.

Puede apreciarse que el programa, lejos de renunciar a la centralidad que caracterizó al Estado venezolano durante las décadas anteriores, intenta reforzarla dando un papel preeminente a la propiedad, promoción y regulación estatales.

El peso de la coyuntura crítica: primeras medidas económicas y sociales

Este conjunto de ideas generales se confrontó, al iniciarse el gobierno, con una grave crisis en varios aspectos de la economía y la sociedad: la caída del ingreso externo como consecuencia de los bajos precios del petróleo y de otras exportaciones como el acero y el aluminio; el estancamiento de la economía con su secuela de desempleo, y el grave déficit fiscal.

Según un informe del Ministerio de Hacienda, el sector público consolidado restringido (que incluye las empresas estatales) tuvo un déficit de 6,1 puntos del Producto Interno Bruto en 1998. La caída en los precios del petróleo determinó un descenso en el ingreso del Estado, que fue compensado por la venta de activos, principalmente del Fondo de Inversiones de Venezuela. El gobierno central pasó de un superávit de 1,87 % del PIB en 1997 un déficit de 4,27 % (*El Universal*, 30-1-1999, p. 2-1).

Un informe de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera del Congreso de la República afirmaba que, a pesar de la fuerte caída en el ingreso fiscal petrolero durante 1998 (puesto que de un precio promedio estimado por barril de 15,5 dólares, se pasó a uno de 11 dólares), el gasto fiscal real se redujo en menos del 1 %, agravando el déficit (*El Universal*, 30-1-1999, p. 2-1). La misma fuente estimaba que el monto del déficit fiscal en 9 millardos de dólares, que difícilmente podrían ser recaudados con base en los ingresos petroleros e impuestos internos, por lo cual estimaba que sería

indispensable solicitar un acuerdo de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional (*El Nacional*, 24-1-1999, p. H-1). Una encuesta respondida a Reuters por analistas y bancos privados de inversión concluía en que las perspectivas de la economía venezolana para 1999 eran de una caída de 1,8 en el PIB, el doble de la ocurrida en 1998. (*El Universal*, 23-1-1999, p. 2-1).

Las primeras medidas del gobierno se dirigieron a enfrentar el déficit fiscal. Este conjunto de medidas económicas, así como algunas de reorganización de la administración pública, fue presentado al Congreso en solicitud de una Ley Habilitante que permitiera al Ejecutivo proceder con celeridad a tomar las acciones más urgentes. Las leyes habilitantes, que han sido concedidas a varios presidentes en los últimos años, permiten al Ejecutivo legislar sobre determinados temas específicos, limitados al ámbito económico financiero, durante un período limitado. Las medidas más importantes se centran en el ámbito tributario. Se reforma la Ley de impuesto sobre la renta; se sustituye el Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al Mayor por un Impuesto General a las Ventas, lo que debe permitir una mayor base de tributación y una ligera disminución de la tasa impositiva. Temporalmente se impone un impuesto del 0,5 % a las transacciones financieras, como una forma de aliviar el déficit de caja del gobierno.

Se presentan varios proyectos para el ordenamiento de sectores específicos como la electricidad, la infraestructura, la agricultura y tenencia de la tierra, los organismos crediticios estatales y la administración pública. También se plantea la Reforma de la Ley de Seguridad Social, que había sido aprobada a fines de la anterior administración. Para el nuevo gobierno, sin embargo, aquella reforma había sido demasiado orientada hacia la privatización y perjudicaba a los sectores más pobres.

Dos de las medidas más importantes son la proposición de una Ley de protección de inversiones, que proporcione la seguridad jurídica que los inversionistas han venido demandando, y una Ley para el refinanciamiento de la deuda externa (*El Universal Digital*, 18-1-1999). Paralelamente, se habían iniciado conversaciones preliminares con el BID, el BM y el FMI para la obtención o renegociación de préstamos (*El Universal*, 6-2-1999, p. 2-1).

El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo fue el motivo de enfrentamientos con el Congreso. El Presidente acusaba al legislativo de lentitud en la aprobación de la Ley Habilitante, con lo cual se retrasaba la recuperación económica. Una vez aprobada la Ley, incluso con los votos de la fracción gubernamental, el gobierno la devolvió al Congreso, por considerar que éste había cambiado o excluido aspectos esenciales de la misma. Durante todo este proceso de cuestionamiento, grupos de activistas del “polo patriótico” se apostaron frente a la sede del Congreso, exigiendo la aprobación de la Ley, y llegaron a agredir a algunos parlamentarios. Finalmente, la Ley pudo ser aprobada en el mes de mayo, después de arduas negociaciones y conflictos. Sin embargo, el gobierno ha sido lento en la formulación de los decretos que deben llevar a la práctica los objetivos de la Ley Habilitante.

Los dilemas entre la oferta redistributiva del candidato y las realidades económicas que enfrentaba el presidente se hicieron manifiestos cuando éste anunció un aumento del salario de los trabajadores del sector público en 20 % para los salarios más bajos, y dejó los eventuales aumentos en el sector privado a la negociación directa entre empresarios y trabajadores. Esta medida representó un viraje frente a promesas o expectativas de amplios sectores populares, que habían esperado, basándose en las ofertas del Presidente durante la campaña electoral, un ajuste general de salarios

mucho mayor.²⁴ Sin embargo, la medida no provocó reacciones inmediatas organizadas en su contra, en parte por el gran desprestigio y debilidad en que ha caído el sindicalismo tradicional, minado por la corrupción y falta de representatividad. Y en parte también por un amplio margen de confianza que todavía parecen otorgar los sectores populares al Presidente.

Otra manifestación de las distancias entre las expectativas populares y las realidades de la gobernabilidad fue la proliferación de invasiones de terrenos rurales y edificaciones urbanas, que se aceleró poco después de la toma de posesión. Aunque este tipo de acción no es nuevo, y tiende a intensificarse en los períodos iniciales de gobierno, adquirió un alcance nacional y una magnitud desacostumbradas. Esta ola de invasiones había sido en parte estimulada por discursos del propio Jefe de Estado, en los que insistía en que las Fuerzas Armadas no serían usadas para reprimir al pueblo; los invasores acompañaban sus acciones de banderas nacionales y boinas rojas, símbolos de los partidarios del Presidente. Ante la exigencia de los afectados de ejercer la represión por medio de la Guardia Nacional (cuerpo tradicionalmente utilizado para tales fines), el Presidente insistió en el diálogo para convencer a los invasores de desocupar los terrenos, y a tal efecto emprendió una gira nacional. Esta reacción muestra la actitud presidencial de comunicarse directamente con los sectores populares, y cambiar radicalmente el enfoque de la relación entre el Estado, las Fuerzas Armadas y la población. Aunque su efectividad real sea dudosa para solucionar un problema de magnitud nacional, que abarca centenares de propiedades en diversos estados, el cambio de estilo probablemente reforzó su aprobación entre los sectores populares. Pero obviamente creó desconfianza entre inversionistas, algunos de los cuales fueron directamente afectados por las invasiones.

Frente a las indefiniciones de la política estatal, algunos voceros empresariales y políticos reclamaban que no existía un verdadero programa económico del gobierno, un plan coherente de recuperación frente a problemas urgentes como la recesión económica y el desempleo. Un editorial del diario *El Universal* (frecuente vocero de opiniones empresariales), exigía acciones rápidas por parte del Ejecutivo, citando el descenso de la demanda de artículos de consumo, el aumento del desempleo y la parálisis del aparato productivo, que se traducían en el cierre de 352 empresas industriales en el último año y el aumento de la morosidad en los préstamos (“Nuestra Tribuna”, *El Universal Digital*, 21-3-1999). Mientras tanto, el estancamiento económico y el desempleo se han agravado: según una medición reciente, el desempleo abierto alcanza 16 %, el 53 % de los trabajadores se ubica en el sector informal, y de éstos, un 20 % recibe un salario inferior al mínimo legal. Según el mismo análisis, el ingreso real de las familias cayó un 3,85 % entre diciembre de 1998 y mayo de 1999.²⁵

Un análisis de las primeras medidas del gobierno muestra un intento por satisfacer las demandas contradictorias de diferentes sectores: por una parte, los que esperan una acción redistributiva, que materialice las esperanzas de inclusión y justicia social despertadas por el Presidente en su campaña electoral. Y por la otra, la de los inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, de quienes depende la inversión necesaria para reactivar la economía. En los largos años de la bonanza petrolera, el papel del capital privado en el crecimiento económico era minúsculo comparado con los inmensos recursos del Estado. Era la política de inversión estatal,

24 El actual salario mínimo en Venezuela es de aproximadamente 172 dólares, mientras que la cesta alimentaria básica es calculada por los organismos oficiales en aproximadamente 220 dólares, y por organizaciones privadas en casi el doble de esa cifra.

25 Declaraciones de L. León, director de la firma encuestadora Datanálisis. *El Nacional on line*, 24-6-1999.

directa o indirecta, la que determinaba la dirección de la economía. A pesar de ello, el Estado económicamente poderoso protegía, estimulaba y hasta privilegiaba la acumulación privada de capital, siempre que ella no invadiera ciertas zonas reservadas al sector público, como el petróleo y las industrias básicas. Paradójicamente, ahora que la conducción del Estado pasa a manos que desconfían del mercado y de la globalización, y que pretenden restablecer el rol preeminente de aquél en la regulación de la vida económica y social, es cuando se han debilitado más sus recursos económicos de intervención. ¿Podrá esta debilidad económica ser compensada por un proyecto impulsado por los profundos deseos de cambio – y quizás de revancha – de la mayor parte de la población?

Conclusiones: ¿militarización de la vida política o profundización de la democracia?

Las actuales bases de legitimidad del nuevo régimen provienen de su origen en una amplia victoria electoral, su correspondencia con la voluntad de renovación del sistema político que anima a la mayoría de los venezolanos y de la preferencia que esa misma mayoría expresa, hasta ahora, por las formas y procedimientos democráticos. Independientemente de que logre satisfacer las necesidades inmediatas de reducción de la pobreza o el desempleo, que pueden incidir en su mayor o menor popularidad, queda un amplio margen de confianza para ejecutar tareas que, si bien no proporcionan beneficios materiales inmediatos, pueden tener un profundo impacto simbólico y político: el castigo a la corrupción, la reforma de las instituciones políticas para disminuir el excesivo rol de los partidos clientelistas, el ordenamiento y racionalización de la Administración Pública, el restablecimiento de la autoridad de las leyes y de sus representantes, el ataque a la evasión fiscal y los privilegios judiciales. Pero también hay grupos cuyas esperanzas son más particularistas, como la de ocupar los puestos de los burócratas desplazados o recibir subsidios y protección de un Estado paternalista y clientelista. Todas estas expectativas recaen sobre el nuevo gobierno, en tanto se ha presentado como la opción radical frente a las élites que hasta hace poco predominaron.

No puede dejar de observarse que estas expectativas pueden ser exageradas para un gobierno cuya base política es más una coalición difusa que un grupo coherente, y cuyo partido central, el MVR, tiene apenas dos años de fundado. Por ello, no es de extrañar que tanto el gobierno como algunos de sus partidarios hayan dirigido sus ojos a una de las pocas instituciones que han logrado mantener algún grado de prestigio y respeto por parte de la población: las Fuerzas Armadas.

Uno de los logros políticos del Presidente Chávez es haber transformado, en apenas siete años, su relación con sus antiguos compañeros de armas, desde la condición de un insurrecto fracasado a la de Comandante en Jefe. De hecho, no hubiera sido fácil imaginar en aquel momento que algunos de los generales que lo derrotaron acepten ahora ser sus subordinados. Una primera explicación, que algunos podrán tildar de ingenua, consiste en afirmar que prevaleció el principio de respeto a la Constitución y al proceso democrático. De hecho, innumerables rumores circularon en los meses y días anteriores a la elección sobre la existencia de facciones que se negaban a aceptar un eventual triunfo de Chávez y preparaban un golpe de Estado.

Una hábil maniobra de Chávez fue anunciar un mes antes de las elecciones que su ministro de la defensa sería el general Raúl Salazar. Dicho general, ampliamente respetado en la institución, había sido dejado a un lado por Caldera en sus aspiraciones al ministerio. La proposición de Chávez, y su aceptación por Salazar, podrían ser indicio

de un “pacto implícito” en el cual el primero aceptaba la jerarquía política informal desarrollada por los grupos de poder militar, mientras que el segundo, en representación de la institución, reconocía el derecho de Chávez a ocupar la presidencia. Sin embargo, nada garantiza que este pacto sea estable, ni reconocido como legítimo por todas las tendencias internas del sector militar. Los intentos del Presidente por reincorporar a algunos de sus compañeros golpistas, aunque han sido aceptados formalmente, no dejan de crear tensiones en la medida en que complican y agudizan la competencia por los ascensos, y dan la impresión de premiar a quienes insurgieron y castigar a aquellos que defendieron la institucionalidad.

Hasta ahora, las relaciones entre el primer mandatario y las Fuerzas Armadas no han mostrado conflictos visibles: por el contrario, el Presidente ha dado un rol preeminente a este cuerpo, nombrando a numerosos oficiales, tanto retirados como activos, en importantes puestos de la Administración Pública.²⁶ Y, todavía más importante desde el punto de vista institucional, diseñó un ambicioso plan “cívico-militar”, dedicado a atender necesidades urgentes de las diferentes regiones del país, denominado (naturalmente) “Bolívar 2000”. El plan, que se ejecuta los fines de semana, reúne a autoridades civiles y militares, funcionarios de los principales servicios públicos y voluntarios en actividades como mantenimiento de infraestructura, construcción de carreteras, campañas de atención médica y otras similares.²⁷ Como un elemento simbólico de construcción de la nueva alianza entre civiles y militares, dicho plan fue iniciado el 27 de febrero de 1999, exactamente diez años después de los saqueos populares que habían provocado la intervención sangrienta de las Fuerzas Armadas. En tal sentido, declaró el Presidente que el proyecto constituía “... la reivindicación del verdadero papel de las fuerzas armadas, que no puede ser otro que luchar por su pueblo”. Así mismo, insistió en que no se trataba de un plan populista ni una forma de empleo inmediato, ya que su fin era “llamar a todos, a la organización y la revolución democrática, social y económica.” (*El Universal Digital*, 28-2-1999).

Esta nueva forma de intervención de los militares parece haber sido acogida favorablemente por la población. Según la encuesta Datanálisis anteriormente citada, el 73 % de los encuestados está de acuerdo con la política de nombrar militares para ejercer cargos públicos; por otra parte, al preguntárseles si la Asamblea Constituyente debería disolver al Congreso, casi la mitad de ellos estuvo de acuerdo con esa medida,

26 El diario *El Nacional* informaba el 19 de febrero de 1999 (p. D-2) que hasta ese momento habían sido incorporados más de 50 militares activos o retirados a diferentes tipos de altos cargos. Entre ellos, dos directores de la empresa petrolera estatal, PDVSA, el director general de la dirección de inteligencia y prevención del ministerio de relaciones interiores, el ministro de infraestructura, el gobernador del Distrito Federal, el director de la policía técnica judicial, el superintendente tributario, y el director de la oficina central de presupuesto. Un acuerdo político también permitió elegir como presidente del Congreso a un coronel retirado, militante del MVR. En los meses siguientes esta tendencia se acentuó, incluyendo la designación de un militar activo como ministro de la Secretaría de la Presidencia, un cargo clave que maneja el sector productivo estatal.

27 Una evaluación del plan mostraba los siguientes resultados: “Más de 16 mil personas, exactamente 11.408 militares y 4.940 civiles, trabajan en las actividades desarrolladas dentro de la Operación Bolívar 2000. Según datos aportados por la Coordinadora Interministerial de este proyecto, se han realizado trabajos de reparación y mantenimiento en mil trescientas escuelas, 71 hospitales y 381 ambulatorios. Asimismo, hasta el momento se han reparado 383 carreteras, 2.221 calles, 487 aceras, y 24 canchas deportivas. Igualmente, se han llevado a cabo trabajos de mantenimiento en 449 quebradas y 120 cunetas.” (*El Universal Digital*, 21-3-1999). Este recuento no toma en cuenta las actividades de atención a la salud y asistencia social.

que implicaría transferir la facultad de legislar al Ejecutivo o a la misma Asamblea (*El Universal*, 20-3-1999, p. 1-10).

¿Significa esto que los venezolanos estén dispuestos a experimentar con un gobierno militar (o al menos militarista) ante el fracaso de los partidos políticos? No se han presentado hasta ahora evidencias que reviertan la preferencia por un régimen democrático, expresada en todas las encuestas de opinión realizadas en Venezuela durante varias décadas. Sin embargo, el significado de “democracia” puede variar de acuerdo a la definición de sus actores hegemónicos. Así, una encuesta realizada por David Myers en 1992, poco después de la intentona de Chávez, preguntaba “Para el futuro de Venezuela, ¿considera usted que lo mejor es el sistema democrático con los partidos actuales, el sistema democrático sin los partidos actuales, o un gobierno militar fuerte?”. Aunque la democracia con los partidos actuales todavía obtenía el primer lugar con el 48 %, la democracia sin ellos obtenía un 40 % y el gobierno militar un 8 %. (Myers, 1992, p. 62). Comentando los resultados, afirma Myers:

“Es posible que los venezolanos se sientan frustrados con AD y COPEI, pero ningún otro partido, ni el revitalizado MAS ni el radicalmente populista Causa R, tienen tampoco una imagen más favorable. Eso sugiere que hay un deseo ferviente de que aparezcan nuevos líderes y un liderazgo carismático.” (p. 68).

De hecho, ya en ese momento dicho liderazgo había hecho su aparición, pero dotado de medios puramente militares; los años subsiguientes le permitieron, con la ayuda de los mecanismos “puntofijistas” de conciliación y resolución de conflictos, cambiar la prisión por la lucha electoral. Y con la no menos apreciable ayuda de los errores y ceguera de los grandes partidos tradicionales, llegar al poder por la vía pacífica, legal y democrática que parece seguir siendo la preferida por los venezolanos. El dilema actual es si la economía y los actores sociopolíticos podrán resistir las tensiones de todo tipo que se presentan.

El movimiento político que ha llevado al Presidente Chávez al poder es un ejemplo notable de la capacidad que ha tenido hasta ahora la sociedad venezolana para enfrentar los cambios necesarios sin recurrir a la violencia o a la interrupción del orden constitucional. Sin embargo, este lado positivo tiene, a nuestro juicio, su talón de Aquiles en el intenso personalismo de la fórmula política chavista. Esto la hace semejante a otros ensayos de recomposición política en América Latina que han sido calificadas como “democracias delegativas”.

La limitación esencial de este fenómeno es que una vez más se delega en el líder carismático la tarea de reforma política e inclusión social, en lugar de proceder por la vía, mucho más lenta, menos emotiva y más gris, de la construcción cotidiana de las organizaciones populares autónomas que permitirían controlar e incluso, si es necesario, censurar al líder en caso de que su conducta se aparte de los principios democráticos. Otra limitación de las expectativas hacia el actual régimen es su carácter distributivista, ya que el país es estructuralmente cada vez menos capaz de captar renta petrolera para distribuirla entre los diferentes grupos sociales.²⁸

A diferencia de lo que se percibe a primera vista, no es la primera vez en el siglo XX que la sociedad venezolana se encuentra dividida entre opciones políticas antagónicas. La violencia verbal de los debates y enfrentamientos políticos del trienio 1945-1948,

²⁸Puesto que todavía el gobierno no tiene un programa económico consistente, no se puede asegurar que el mismo vaya a ser francamente rentista y distributivista, pero la expectativa popular acerca del mismo sí parece serlo.

las incidencias de las elecciones de 1952, e incluso los temores ante la victoria de Acción Democrática en 1958, son ejemplos de otros momentos de enfrentamiento entre proyectos que aspiran a la hegemonía y fuerzas que se resisten a ser excluidas. La diferencia está, quizás, en que las coyunturas mencionadas se produjeron en momentos en que el modelo de desarrollo industrializador protegido y de distribución rentista tenía ante sí un amplio panorama de expansión. Este modelo permitió ampliar los sectores incluidos en el sistema político y en la vida económico-social sin afectar estratégicamente a los grupos tradicionales de poder.

El momento actual, por el contrario, es el del agotamiento de un modelo y de la falta de consenso alrededor de los parámetros de uno nuevo; de una pérdida definitiva de viabilidad del modelo de distribución rentista y de una (justificada) desconfianza ante un modelo de apertura liberal; de un enfrentamiento entre grupos económicos transnacionalizados y otros que defienden el modelo de desarrollo hacia adentro; de un proceso de exclusión social que afecta incluso la relevancia de lo político para amplias capas de la población, y especialmente de la juvenil; de una exacerbación de las desigualdades sociales que tiende a convertir a cada clase en una subcultura aislada espacial y culturalmente de las otras; y de un desprestigio de la actividad política, y de la vida pública en general, que tiende a desembocar en la demanda de soluciones simplistas y autoritarias. El desafío para todos los actores sociopolíticos es entonces el de producir los cambios deseados sin destruir las bases de la convivencia social.

Referencias

- Arvelo Ramos, Alberto, *El dilema del chavismo. Una incógnita en el poder*, Caracas, Centauro, 1998
- Blanco Muñoz, Agustín, *Habla el comandante*, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1998.
- Chávez, Hugo, "Presentación", en: *Agenda alternativa bolivariana: una propuesta patriótica para salir del laberinto*. Caracas, 1996
- Cavarozzi, Marcelo, "Beyond Transitions to Democracy in Latin America", *Journal of Latin American Studies*, Vol. 24, Nº 2, 1994
- Crisp, Brian, *El control institucional de la participación en la democracia venezolana*, Caracas, Jurídica Venezolana, 1997
- Gómez Calcaño, Luis, "Venezuela: perte de légitimité démocratique et coup d'Etat", *Problèmes d'Amérique Latine*, Nº 6, juillet-septembre 1992
- Gómez Calcaño, Luis, "Crisis de legitimidad e inestabilidad política en Venezuela", *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Nº 2-3, abril-septiembre 1995
- Gómez Calcaño, Luis, "Venezuela: organisations sociales et luttres pour la citoyenneté", *Problèmes d'Amérique Latine*, Nº 29, avril-juin 1998
- Karl, Terry Lynn, *The Paradox of Plenty. Oil Booms and Petro-States*. Berkeley, University of California Press, 1997
- Lipset, Seymour Martin y W. Schneider, *The Confidence Gap*, New York, The Free Press (citado por Oropeza, 1998)
- López Maya, Margarita, "Nuevos actores en la crisis de legitimidad del sistema político venezolano: La Causa R, Convergencia y el MBR-200", *Cuadernos del CENDES*, Nº 32, mayo-agosto 1996
- López Maya, Margarita y Luis Gómez Calcaño, "Desarrollo y hegemonía en la sociedad venezolana", en: López Maya, Margarita, Luis Gómez Calcaño y T. Maingón, *De Punto Fijo al Pacto Social: Desarrollo y Hegemonía en Venezuela: 1958-1985*, Caracas, Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, 1989.
- López Maya, Margarita y Luis Gómez Calcaño, "¿Por qué no avanza la reforma constitucional en Venezuela? Partidos, medios y actores sociales." *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Nº 2-3, abril-septiembre 1996
- Mommer, Bernard, "La economía venezolana: de la siembra del petróleo a la enfermedad holandesa", *Cuadernos del CENDES*, Nº 8, segunda época, mayo-agosto 1988
- Myers, David, "Percepciones de una democracia bajo presión: ¿decadencia inevitable o refundación?", en: Serbín, Andrés, A. Stambouli, J. McCoy y W. Smith (editores), *Venezuela: la democracia bajo presión*, Caracas, INVESP, North-South Center (u. De Miami), Nueva Sociedad
- Oropeza, Angel, "El confidence gap: un insumo psico-político para la estabilidad del sistema democrático venezolano", *Cuestiones Políticas*, Nº 20, 1998
- Líneas del programa de gobierno*, MVR, en: *El Universal Digital*, sección especial: campaña electoral
- Quenan, Carlos, "Venezuela: un redressement économique inachevé", *Problèmes d'Amérique Latine*, Nº 29, avril-juin 1998
- Rey, Juan Carlos, "El sistema de partidos venezolano", en: *Problemas sociopolíticos de América Latina*, Caracas, Jurídica Venezolana, 1972
- Rey, Juan Carlos, *El futuro de la democracia en Venezuela*, Caracas, IDEA, 1988
- Salamanca, 1998, "Venezuela: la crise des partis politiques", *Problèmes d'Amérique Latine*, Nº 29, nouvelle série, avril-juin 1998
- Subero, Carlos, "Encuestas en campaña", , 21-12-1998
- Urbaneja , Diego Bautista, *Pueblo y petróleo en la política venezolana del siglo XX*, Caracas, CEPET, 1992
- Zago, Angela, *La rebelión de los ángeles*, Caracas, Fuentes, 1992

Prensa

El Universal, Caracas

El Universal Digital, <http://eud.com>

El Nacional, Caracas

El Nacional On Line, <http://www.el-nacional.com>